

sado y con familia, al transitar por el pueblo de Mixquic en 16 de Febrero próximo anterior, fué aprehendido por el presidente municipal y remitido á esta ciudad como parte del contingente de sangre que á ese pueblo habia asignado el Gobernador del Distrito Federal, habiéndosele destinado contra su voluntad al servicio de las armas en un cuerpo de artillería, con violacion en su persona de la garantía que otorga el art. 59 de la Constitucion de la República. Visto el informe del Gobernador del Distrito Federal, exponiendo: que Solano le habia sido remitido por el Prefecto de Xochimilco, en 18 de Febrero de este año, por cuenta del contingente de sangre señalado al Distrito, en virtud del reclutamiento que entonces se estaba haciendo por las facultades extraordinarias concedidas al poder Ejecutivo, y que aun no se publicaba la ley de 17 de Mayo último, y el Prefecto referido habia hecho la consignacion del quejoso al servicio militar. Vistos los informes del Prefecto citado y del presidente municipal de Mixquic, alegando este, que aprehendió á Solano como acusado de mala conducta y vago, y le consignó al servicio de las armas por tales antecedentes. Vistos los documentos presentados y las demas constancias de autos.

Considerando: que habiendo cesado de regir la ley de 2 de Diciembre de 1871, en virtud de la cual se hizo la consignacion del quejoso al servicio militar, y no teniendo voluntad de ser soldado, la queja que ha presentado, reclamando como una violacion de la garantía que otorga el art. 59 de la Constitucion Federal, su continuacion en el ejército, es fundada en justicia.

Con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente; 1º Es de revocarse y se revoca la sentencia que pronunció el juez 1º interino de Distrito de México en esta ciudad, á 5

de Noviembre próximo pasado, declarando: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Evaristo Cenobio Solano. 2º La Justicia de la Union le ampara y protege contra el procedimiento que ha motivado el presente recurso de amparo.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de Distrito de donde proceden con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Tercer.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Anza.*—*Simon Guzman.*—*Luís Velazquez.*—*José García Ramirez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luís María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 9 de 1873.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo por los CC. José M. Carbajal y Francisco de A. Osorio, contra el decreto núm. 141 de la Legislatura de Estado que reformó el Tribunal Superior.

PRIMER PEDIMENTO FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Lic. José M. Carbajal, por el ocuro que presentó el día veintiseis del mes próximo pasado, asegura: que segun el instructivo que acompaña y que corre á fojas una del expediente, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado se le está juzgando por responsabilidad que se

supone contrajo al emitir un dictámen en el juicio seguido por el C. Manuel Vergara Galindo, contra el C. administrador de Rentas de Tulancingo, y añade, que si tal responsabilidad es verdadera, el tribunal determinado previamente por la ley para juzgarlo conforme al art. 72, fracción 2ª de la ley de administración de Justicia del Estado, es el mismo Tribunal Superior con la formación que le dieron los decretos números 7, 66 y 85 y no por la que ahora le da el decreto número 141 que suprime una de sus dos salas.

Al examinar el Promotor estas razones y las mas que ha expuesto el quejoso, como la de que por los artículos transitorios de la Constitución particular del Estado, 87, 99 y 30, se hallaba garantizado para todos los habitantes del mismo la existencia del Superior Tribunal como estaba antes hasta el 15 de Julio de 1875; no puede menos que considerar se han violado en la persona del C. Lic. Carbajal las garantías que le aseguran los artículos 13 y 14 del Pacto federativo, pues contrayéndose como se contrae el Decreto 141, á la organización del Tribunal y no á la de los CC. Magistrados, es evidente que el nuevo viene á ser un Tribunal especial y la ley que lo forma retroactiva.

Esto es tan palmario que no necesita de mayor prueba, de manera que, por esto se decide el suscrito á pedir, con arreglo al art. 23 de la ley de 20 de Enero de 69, que la Justicia Federal debe amparar y proteger al C. José M. Carbajal contra el decreto 141 ya dicho, puesto que con él se violan en su persona las garantías individuales que le aseguran los artículos 13 y 14 del Pacto Federativo.

Pachuca, Octubre seis de mil ochocientos setenta y dos.—*M. Sanchez.*

Es copia que certifico. Pachuca, Octubre 25 de 1872.—*F. Briceño*, secretario.

SEGUNDO PEDIMENTO FISCAL.

El Promotor Fiscal dice: que el C. Lic. Francisco de Asis Osorio, magistrado del Superior Tribunal de Justicia del Estado, se queja de haberse violado en su persona, por el decreto núm. 141 las garantías individuales de que goza, conforme á los artículos 4, 14, 21 y 16 de la Carta fundamental de la República.

Consta de autos, que el C. Lic. Francisco de Asis Osorio era magistrado conforme al decreto núm. 7; que lo debe ser segun el art. 3º de los transitorios de la Constitución del Estado, hasta el 15 de Julio de 1875, fojas 1, y que en todo ese tiempo no puede ser removido ni suspendido sino por un veredicto que le declare culpable y digno de formación de causa [87 y 99 de la misma Constitución].

Si es un derecho del hombre, como lo es, que á este no se le puede privar de los productos que le proporcione su profesión, industria ó trabajo, sino por sentencia judicial, es claro que el privársele de ellos, como se le priva al solicitante por el decreto número 141 sin los requisitos de la Constitución y leyes del Estado, es violar las garantías otorgadas por el art. 4º de la Carta fundamental de la República. Si el C. Osorio aceptó ó hizo la protesta concerniente al cargo de magistrado, bajo los preceptos que impone aquella, su actual destitución, su eliminación del poder judicial es una pena que le despoja de los emolumentos que tiene adquiridos en virtud del art. 3º de los transitorios y de los demas ya mencionados.

Equivaliendo esto, pues, á una infracción del art. 16 de la expresada Carta fundamental de la República, al Juzgado pide el Ministerio Fiscal se ampare y proteja al C. Lic. Francisco de Asis Osorio, de conformidad con el art. 23 de

la ley de 20 de Enero de 1869, contra el decreto de que se queja.

Pachuca, Octubre 7 de 1872.—*M. Sanchez.*

Es copia que certifico. Pachuca, Octubre 25 de 1872.—*F. Briseño*, secretario.

Sentencia del C. juez de Distrito.

Pachuca, Octubre 21 de 1872.—Intentóse este juicio por los CC. Lics. José M^{te} Carbajal y Francisco de Asis Osorio, contra el decreto núm. 141 de la legislatura, que reformó al Tribunal Superior, por reputar violadas en sus personas, ambos, la garantía consignada en la 2^a parte del art. 14 del Pacto federal, el primero además la del art. 13, y el último las de los arts. 4, 1^a parte del 14, 16 y 21.

I.

1. El Tribunal modificado por el congreso debe su existencia al art. 39 de los transitorios de la Constitución local, según el que, debe durar seis años, desde el de 1869 en el que se creó hasta el de 1875 en que ha de cesar. La designación de ese período por un artículo transitorio no es sino la aclaración y cumplimiento del art. 87 de dicha Constitución que garantiza á los magistrados el ejercicio de su encargo por seis años y del 99 que prohíbe la remoción de estos funcionarios, durante este tiempo, sin causa legalmente probada y sentenciada. Los individuos que formaban el expresado Tribunal, al publicarse aquel código, eran los CC. Lics. Francisco de Asis Osorio, Juan Benavides, Modesto Herrera, Lino Beltrán y Francisco Bulman, sustituidos después legalmente por los CC. Ignacio Nieva y Miguel Mancera, Pedro Montes de Oca y fiscal Mariano Botello (fs. 3). Ciertamente es que la Constitución puede ser reformada; pero

en primer lugar, para ello se necesitan algunas formalidades que no han sido observadas, y en segundo, las reformas no afectan derechos adquiridos.

2. Constaba entonces el Tribunal de dos Salas, con iguales atribuciones, teniendo el actor la facultad de escoger de ellas la que más le acomodare, dejando la otra para la instancia subsecuente (arts. 71 y 390 de la ley de 11 de Julio de 1868 y demás leyes vigentes).

Verdad es que según el art. 85 de la Constitución, el Tribunal Superior puede constar de una Sala; pero también lo es, que el cumplimiento de ese artículo no puede tener lugar sino hasta el año de 1875, y por otra parte, la reducción de dos Salas en una, no trae imbita la reducción del número de magistrados, pues bien podrá quedar la nueva Sala compuesta de seis, en lugar de tres. —

Los suplentes se nombraban conforme á los arts. 55 y 65 de la citada ley de 11 de Julio; pero respecto de ellos había frecuentes variaciones, hasta que se dió el decreto núm. 107 (fs. 41) por el que se establecieron tres suplentes, por tiempo determinado, que expira cuando concluya el de los propietarios. Las personas nombradas conforme á esta última disposición fueron los CC. Mariano Rodríguez Veitia, Jorge Antonio Zamora y Joaquín Claro Tapia (decreto núm. 118 fs. 42). Desde el momento de estos nombramientos, los magistrados suplentes no dependieron ya, de la voluntad del Congreso, porque los ciudadanos adquirieron un derecho indestructible de ser juzgados por ellos durante el tiempo prefijado por la ley.

3. El congreso, pocos días antes de publicarse el decreto reclamado (fs. 44) destituyó abusivamente del cargo de presidente del Tribunal al C. Osorio y nombró en su lugar al C. Modesto Herrera (fs. 43).

4. El decreto que ha originado este

juicio y el núm. 142 que lo es consiguiente (fs. 45), puso término al Tribunal á los tres años, estando garantizado por seis; removi6, sin los requisitos del art. 99, á los CC. Osorio, Benavidez y Montes de Oca, así como al suplente Rodriguez Veitia, antes de expirar el período de su encargo; redujo á tres, de seis que eran, el número de los magistrados propietarios; suprimió una Sala y con ella el derecho que tenían los litigantes de elegir jueces, eligiendo Sala; removi6 por completo y sustituy6 en otros diversos, las personas que formaban el Tribunal de última instancia, supuesto que debiendo conocer en este una de las Salas formada de Magistrados propietarios, designados con anterioridad, conocen ahora los suplentes nuevamente nombrados; suprimió en muchos casos la segunda ó tercera instancia, porque si todos ó algu-

nos suplen á los propietarios por alguna causa lo-

con anterioridad y pone en peligro, do las instituciones, sino todas las afías de los individuos de la socie-

La nueva organización, como se ha, niega á las partes el derecho de r á sus jueces, eligiendo Sala; y, ó imo, porque hace imposible, el Tri- d de segunda ó tercera instancia, ó una con personas diversas de las que minaba la ley, cometiendo á los su- tes funciones que no les da la Cons- tion del Estado [artículos 85 y 88].

La reducción caprichosa del núme- e Magistrados, dice Macarel, da me- garantías de imparcialidad, rectitud, lencia y acierto en sus decisiones; y demas una medida indirecta á que re la tiranía para destruir la indepen- cia judicial y con ella todas las liber- es públicas, todos los derechos del ibro [Macarel, del. pub. cap. 3, lib. 3, 38, núm. 2, art. 1 y 13].

La remoción arbitraria de las per- as de los Magistrados antes de expi-

3. Aunque el Tribunal nuevamente creado, por los incidentes que refiere el quejoso y por no emanar de la ley sino de la voluntad de los diputados, parece un Tribunal extraordinario ó de comisión, las circunstancias de extenderse su jurisdicción á todas las personas y casos del fuero común, le quitan el carácter de Tribunal *especial*, razón por la que no debe reputarse violada la garantía del citado art. 13.

4. El Tribunal establecido por el decreto reclamado difiere del anterior, en la *organización*, número de los Magistrados y *personas* de los mismos. Un cambio esencial en cualquiera de estas partes constitutivas, hace cambiar esencialmente el Tribunal. Pero las modificaciones introducidas por el decreto de que se trata, no son meramente accidentales, sino sustanciales; porque cada una de

además la fuerza de los hechos, además, gal, llegan á integrar la Sala única, no podrán conocer en la instancia siguiente, en cuyo caso ó no hay absolutamente Tribunal de apelación ó suplicación, ó queda incompleto, sin arbitrio alguno de integrarlo. Otras veces sucederá, aunque ninguno de los suplentes integre la Sala, que por cualquiera causa legal se inhiba alguno de ellos de conocer en ciertos negocios en la última instancia, sin que haya medio de sustituirlo; resultando de todo esto que dichos negocios quedarán paralizados indefinidamente, contra la disposición del art. 17 del Código Federal que previene sea pronta y expedita la administración de justicia.

II.

1. Fijados así los hechos, los analizaremos á la luz de la Constitución y con relación á cada una de las garantías que se reputan violadas.

2. El O. Carbajal señala de estas, las consignadas en los artículos 13 y segunda parte del 14.

Unos
rido.
no s
gar
dad
5
vist
elog
sup
ban
le á
del
ple
fiti
4
ro
nos
pu
es
oci
dei
tac
ho
se
so

rar el término para el que estaban nombrados; arrebatada, dice el autor citado, á los individuos el derecho de ser juzgados por sus jueces naturales. Anuncia en los gobiernos el designio de satisfacer venganzas. es una arma infalible en manos de los tiranos para deshacerse de los sujetos que les hacen sombra. Los tribunales nombrados á voluntad del gobierno, con cualquiera apariencia que se les presente y bajo cualquier pretexto que se les instituya, se deben mirar como tribunales sanguinarios, empleados para atinar con mas seguridad al partido vencido. de ellos no puede esperarse compasion, ni humanidad, ni sentimientos de justicia. para con estos tribunales, las virtudes, la probidad, los servicios, no son consideraciones ni títulos de indulgencia; estos títulos, al contrario, irritan á jueces que ha degradado el encargo que tienen; el poderío que los paga les ha designado las víctimas; ellos han de obedecer y no les toca mas que pegar. cuando las facciones ó los tiranos tienen necesidad de rodear de ciertas formas las venganzas que quieren ejercer, siempre encuentran hombres apasionados que hallan en sus corazones rencorosos motivos para encargarse de ese odioso ministerio [Macarel número citado, art. 6º]

La duración de los jueces, segun Story, por todo el tiempo que la ley designa, es absolutamente necesaria para garantir los derechos de los ciudadanos contra las invasiones del espíritu de partido ó la tiranía de las facciones. En una república, nada mas fácil para los demagogos que organizar bajo pretextos falaces algunas cábalas contra el ejercicio regular de la autoridad. Ven sus proyectos interesados deshechos muchas veces por la firmeza é independencia de los Magistrados. En las repúblicas, los que se benefician en las convulsiones intestinas ó en el predominio de una facción,

Tomo III.—Parte II.

son siempre enemigos declarados de una justicia regular ó independiente. En tales circunstancias es evidente que si la duración de las funciones judiciales no fuese permanente á lo menos por el plazo designado previamente, los jueces que se habian hecho odiosos por su resistencia no tardarian en dejar su lugar á otros mas complacientes con los demagogos favoritos. la autoridad judicial es la única garantía de las minorías pacíficas. En los gobiernos libres donde la mayoría que obtiene el poder se presume representar la voluntad del pueblo, las persecuciones, y principalmente aquellas de naturaleza política, se hacen la causa de todos contra uno solo. las persecuciones son mas violentas y mas incesantes, porque se les juzga indispensables para obtener el poder ó para gozarlo si se le ha obtenido. en los gobiernos libres, la independencia del poder judicial es mucho mas importante para la garantía de los derechos de los ciudadanos, que en una monarquía, porque ella es la única barrera contra la opresion de una pasión dominante armada momentáneamente del poder y abusando de su influencia para destruir las instituciones y las libertades públicas. ¿Se podrá esperar que hombres cuyos empleos duren dos, cuatro y aun seis años y menos todavía cuando dependen de la voluntad y capricho de los gobiernos, sean bastantes fuertes para resistir á los que los nombran y que pueden destituirlos? despues de estas consideraciones, si se consultan los hechos, será fácil convencerse que el poder judicial está seguro en una República cuando sus empleos son inamovibles mientras dura la buena conducta del juez ó por lo menos durante el período designado por las leyes, y que la justicia será mejor administrada allí donde la independencia es mayor. La confianza pública ha descansado siempre so-

bre el poder judicial en las circunstancias mas críticas. . . . Seguramente una República con una Constitución definida, pero sin un poder judicial bastante independiente para resistir á las insurpaciones ó defender los derechos y las libertades *privadas*, sería una quimera, sería una sociedad organizada sin ningun freno, sería, como dice Laboulaye, una sociedad de bandidos. . . . El gobierno se hará mas arrogante, mas vengativo, quizá sanguinario, porque alimentará en su seno facciones incesantes que no podrán llegar al poder sino sobre la ruina de las facciones rivales (Story, comen. de la Cons. ameri., cap., 41 números 873 y siguientes).

Si como se ve por las anteriores doctrinas de autores respetables, la inmovilidad de las *personas* de los Magistrados y la conservacion de su *número*, constituye la independencia del poder judicial; si esta es la única garantía de la libertad, de la seguridad y propiedad de los ciudadanos; y si la *nueva organización* del Tribunal ha destruido derechos justos y legítimos, es evidente que las modificaciones introducidas en las partes constitutivas del expresado Tribunal son esenciales; y es inconcuso, por lo mismo, que el decreto reclamado ha instituido un Tribunal enteramente diverso del que debía juzgar al C. Carbajal, violando en su persona la garantía que invoca, del art. 14 en su última parte, de la Constitución general, segun el que, nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por el Tribunal establecido previamente por la ley.

Por otra parte, despojar de sus funciones á los Magistrados, antes de expirar el período constitucional de su duracion, ó prorogárselas arbitrariamente cuando este mismo período ha terminado, son cosas enteramente iguales por lo que toca á la jurisdiccion. Los Tribunales emanados de cualquiera de estos dos

modos, violan la citada garantía del art. 14, como sabiamente lo ha declarado la Suprema Corte de Justicia, con motivo de unos juicios de amparo promovidos por Pablo Solis y Facunda Romero, contra un decreto de la Legislatura de Yucatan, que prorogó indebidamente el período constitucional de los jueces y Magistrados.

III.

1. El C. Osorio considera violadas en su persona las garantías de los artículos 4 y 14 en sus dos partes, 16 y 21 de la Constitución Federal.

2. Constando á este Juzgado que á aquel ciudadano (fojas 22 vuelta), se le instruye causa por delito comun ó de responsabilidad ante el Gran Jurado del congreso de este Estado, y debiendo á su tiempo ser sentenciado por el mismo Tribunal reformado [art. 105 y 106 de la Const. loc.], es indudable, por las razones aducidas poco há respecto del C. Carbajal, que el decreto reclamado viola en la persona del referido C. Osorio la garantía de la segunda parte del art. 14 antes mencionado.

3. Aunque el propio decreto, por los antecedentes habidos entre el quejoso y la Legislatura, parece que tuvo por mira principal imponerle la pena de destitucion de su encargo, á que tendian los procedimientos iniciados ante el Gran Jurado, y que se mandaron suspender por este Juzgado en virtud de otro juicio de amparo que aun está pendiente, como semejante destitucion no hace relacion á delito ó falta alguna, no puede decirse que se ha aplicado al C. Osorio una pena propiamente tal, contra lo dispuesto en el art. 21 del Pacto Fundamental.

4. Segun el art. 16 de este mismo Código, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de manda-

miento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Pero este precepto se refiere á atropellamientos, prisiones, detenciones, arraigos, destierros, exámenes ó registro de papeles, catcos, embargos y cosas semejantes; se dirige en general á consagrar el goce completo de la seguridad individual y de la inviolabilidad del domicilio; mas no se ocupa de garantizar derechos civiles ó políticos adquiridos por leyes y contratos, aun cuando la pérdida de ellos sea una molestia para las personas. El atentado cometido con el mencionado C. Osorio, no constituye pues, un ataque á dicha garantía.

5. Tampoco se halla afectada la del art. 49 por la disposicion reclamada, pues esta no quita al quejoso la libertad de abrazar cualquiera género de trabajo, ni de aprovecharse de sus productos. Ciertamente es que se le priva de un cargo público y de los emolumentos consiguientes, á los que tenia derecho por seis años; pero no se le priva de un modo absoluto de la libertad de ejercer la magistratura, siempre que el Estado solicite sus servicios, sino que se liberta á este de la obligacion en que está de recibirlos durante aquel tiempo.

6. No sucede otro tanto con la garantía de la primera parte del art. 14, segun el que, no podrá expedirse ninguna ley retroactiva. El decreto número 141 de que se trata, privando arbitrariamente de su empleo al C. Osorio, es una ley de esta clase; porque toda ley que modifica los contratos, que cambia las intenciones de las partes, que rescinde las obligaciones contraídas, que destruye en general los derechos adquiridos, tiene efectos retroactivos: y los empleados inamovibles, no son sino *individuos* que contratan sus servicios con el Estado por cierto tiempo y mediante cierta retribucion. Hay un verdadero contrato

entre aquellos y este, del que emanan derechos y obligaciones recíprocas entre ambas partes.

En efecto. Un contrato es una convencion por la cual una ó mas personas se obligan con otra ú otras, á dar ó no dar, hacer ó no hacer alguna cosa (Escriche en su dic., art. Contrato); es un convenio por el que dos ó mas personas se transfieren algun derecho ó contraen una obligacion (art. 1388 del Código civil de la Federacion). El nombramiento hecho por el Estado en favor del C. Osorio para Magistrado del Tribunal Superior, es una convencion por la que este se compromete á cumplir fielmente con los deberes de su encargo; á guardar y hacer guardar la Constitucion y las leyes; y á no separarse del mismo encargo, durante cierto tiempo, bajo la pena de privacion de los derechos de ciudadano ú otros semejantes (arts. 118 y 31 de la Constitucion local, y 298 del Código penal de la Federacion). El Estado por su parte se obliga á no removerlo durante seis años, sino por causa legalmente probada y sentenciada, y á darle una compensacion determinada por sus servicios, que no podrá ser aumentada ó disminuida mientras permanezca en su empleo (artículos 87, 99 y 117 de la referida Constitucion). El nombramiento expresado trasfiere derechos y obligaciones recíprocas entre el Estado y el individuo. Es, pues, un contrato; porque donde está la esencia de una cosa allí está la cosa misma. Las partes constitutivas de todo contrato, son personas aptas para obligarse, consentimiento y materia ú objeto lícito. Donde quiera que estas se encuentren reunidas, allí está aquel, si no se quiere sostener el absurdo de que una cosa puede existir sin sus atributos esenciales, ó que todos estos juntos no constituyan aquella. En el nombramiento de que se trata existen los caracteres esen-

ciales de todo contrato. Hay personas capaces, consentimiento y un objeto de maciado lícito. Hay pues, un contrato.

Roa Bárcena llama *contratos de servicios personales en cargos públicos*, los nombramientos de empleados y funcionarios; y Macarel [dere. pub., tít. 3, cap. 4, art. 2º, núm. 4], después de probar, hablando también de estos, que lo mismo es *arrendar* para la utilidad pública el capital físico de un individuo, como su trabajo ó capital moral, pregunta: ¿qué diferencia hay entre los que *acensúan* su capacidad intelectual, y entre los que ponen á rédito su trabajo? ¿Entre los que se consagran al servicio de la sociedad y los que se dedican á uno privado?

La Constitución que prohíbe alterar los contratos, no distingue entre públicos y privados: á todos los protege igualmente. Tampoco podía ser de otra manera. Un individuo contratando sus servicios con un particular, no puede ser de mejor condición que el que los contrata con el Estado. El deber de cumplir los compromisos contraídos, es de derecho natural; y esto obliga igualmente á los particulares entre sí, como á la sociedad para con sus miembros. Un Estado negándose á cumplir sus estipulaciones á título de soberano, sería lo mismo que el león de la fábula, que á título de fuerte y poderoso, tomó para sí toda la presa, dejando burlados á sus compañeros.

Además, ¿qué es un contrato en el sentido constitucional de la palabra, para el efecto de no poder ser modificado por leyes retroactivas? Es, dice Story sencillamente, un convenio para hacer ó no hacer alguna cosa. De aquí infiere con claridad, que nada importa la condición ó calidad de las partes contratantes. Lo mismo son los convenios entre particulares, que entre Estados; que entre estos y aquellos; que entre

Estados y corporaciones—en cuanto afectan derechos privados;—y que entre corporaciones y particulares. Donde quiera que aparezca *contraída* una obligación, que de algún modo redunde en bien de los individuos, allí está el contrato constitucional.

En esta virtud, un contrato puede nacer inmediatamente de la voluntad de los particulares ó *emanar de un Estado, en virtud de una ley*, que es el caso que nos ocupa. Dudóse al principio, dice el autor citado, si actos semejantes debían ser considerados como actos legislativos, susceptibles de ser revocados por el mismo poder que los había decretado; pero después de una deliberación solemne se decidió, que las concesiones y los *contratos* hechos por un Estado, son tan inviolables como los *contratos* ó condiciones emanadas de los particulares. Una Legislatura puede, por una ley, contratar con los particulares y comprometer la fé del Estado á la ejecución del contrato; luego se puede considerar como un principio cierto, que *todas las veces que la ley toma el carácter de un contrato y que resultan derechos para las partes contratantes*, la revocación de esa ley no puede destruir ni modificar los derechos adquiridos (Story, coment. sob. la Const. ameri., cap. 36, núm. 695, 704 y siguientes).

Pero llámense como se quiera los nombramientos de empleados y funcionarios. Ellos, principalmente cuando son para tiempo determinado, constituyen derechos personalísimos á favor de los individuos á quienes se confieren. Story, tratándo de esta clase de empleados, enseña [cap. 32, núm. 799 y 800]: que tan luego como está firmado su nombramiento, este es perfecto y definido: el funcionario una vez nombrado así, se encuentra revestido de todos los poderes legales que no pueden ya serle retirados. . . . desde ese momento el

funcionario nombrado tiene un *derecho absoluto* al empleo. . . . La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, intervino en una cuestión basada en estos principios, decidiendo en favor de un empleado.

Bajo la garantía de un empleo, dice Macarel (obra citada, tit. 3, sec. 3ª, cap. 4—art. 2º, núm. 4),—principalmente si es por tiempo fijo—los poseedores, contraen obligaciones, se establecen, se casan; su familia descansa en él y de él aguardan sus hijos el pan cotidiano y las esperanzas futuras. . . . Destituir arbitrariamente a un funcionario, es cometer sin provecho una cosa injusta y cruel.

Al aceptar un cargo público, el hombre no ve solamente la utilidad común de los asociados; ve también la suya propia. Un empleo no es con relación al individuo que lo desempeña, sino un género de industria ó de trabajo útil y honesto. El empleado identifica el interés público con el privado; y esto, más ó menos confuso con aquel, mas ó menos dependiente de los vaivenes de la política, existe siempre como el móvil principal de nuestra carrera pública. No hay que escandalizarse de estas ideas. Las instituciones mas sabias, dice Federico Grimk (naturaleza y tendencias de las instituciones libres, lib. 1º, cap. 6º), son aquellas que mejor combinan en los empleos el interés privado con el bien público.

Espues evidente, que los nombramientos irrevocables de funcionarios, confieren derechos reales, positivos y muy personales. Afectan al empleado como *individuo* y no como empleado.

Ahora bien; el principio de la no retroactividad garantiza toda clase de derechos adquiridos, ya procedan de un contrato, ya de otra causa cualquiera, con tal que sea lícita. El principio enunciado, dice Escribiche, tiene por objeto

garantir á los individuos de la sociedad contra los caprichos del legislador, impidiéndole que viole nuestra seguridad personal; ó que intente arbitrariamente contra nuestra propiedad, despojándonos de *bienes ó derechos* que habíamos adquirido, que forman parte de nuestro patrimonio, que nos aseguran los medios de subsistencia, que constituyen la esperanza de nuestro futuro bienestar. . . . Estos derechos no se derivan solamente de un contrato; pueden nacer de un testamento, de una sucesión ya abierta, de acto irrevocable de cualquiera persona, de otras mil causas racionales y justas; y sin embargo, á todos protege el principio de la no retroactividad. Para que las leyes tengan efecto retroactivo, basta que midan lo pasado en perjuicio de las personas que son objeto de ellas. Mas lo pasado no son precisamente *contratos*, . . .

Infiérese de todo esto, que la primera parte del art. 14 constitucional, garantiza también los derechos privados, adquiridos por un nombramiento para un cargo público, durante cierto tiempo, y por consiguiente, que el decreto reclamado *viole* en la persona del C. Francisco de Asís Osorio la garantía que dicho artículo establece.

IV.

Con estos fundamentos, que el suscrito juez ha creído conveniente emplear, como lo ha hecho, por tratarse de una cuestión delicada y difícil de derecho constitucional, y de conformidad con los arts. 101, fracs. 1º y 102 del Código fundamental que dan jurisdicción á los Tribunales federales para resolver toda controversia que se suscite por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales, sin consideración alguna á la Soberanía de los Estados, limitada siempre por el Pacto federal, es de decretarse y se decreta: 1º

La Justicia de la Union ampara y protege á los CO. Lic. José María Carbajal y Francisco de Asis Osorio, contra el decreto núm. 141 de la Legislatura de este Estado, que reformó el Tribunal Superior y eliminó de sus cargos á algunos magistrados, porque tal disposicion viola en la persona de los quejosos la garantía consignada en la segunda parte del art. 14 de la Constitucion general. 2º No se ampara ni protege al C. Lic. José María Carbajal, contra el expresado decreto por violacion de la garantía del art. 13 del propio Código. 3º La Justicia federal ampara y protege al expresado C. Osorio contra la repetida disposicion, porque al destituirlo de un empleo, antes de expirar el período constitucional de su nombramiento, viola en su persona la 1ª parte del mencionado art. 14. 4º No se ampara ni protege al C. Osorio contra el propio decreto, por violacion de las garantías reconocidas por los arts. 4, 16, y 21 de la referida Constitucion. Hágase saber, previniéndoles á las partes repongan el papel de estas actuaciones; publíquese por los periódicos; compúlsense las copias respectivas para el "Semanario Judicial" y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para la revision de este fallo.

Así definitivamente juzgando lo sentenció y firmó el C. Lic. Miguel Mejía, juez de Distrito de "Hidalgo." Doy fé. —*Miguel Mejía.*—*Francisco Briseño*, secretario.

Es copia que certifico. Pachuca, Octubre 21 de 1872.—*F. Briseño.*

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 19 de 1872.—Vistos los juicios de amparo promovidos ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo por los CO. Lic. José Mº Carbajal y

Francisco de Asis Osorio, contra el decreto núm. 141 de la Legislatura del Estado que reformó el Tribunal Superior, con cuya reforma reputan violadas ambos quejosos la garantía á que se refiere la segunda parte del art. 14 de la Constitucion Federal, y ademas el Lic. Carbajal la á que se refiere el art. 13 y el Lic. Osorio las á que se refieren los artículos 4, 14 en su primera parte, 16 y 21 de la misma Constitucion; y considerando: en cuanto á las garantías que cree violadas en su persona el C. Carbajal, que son las de los artículos 13 y 20 hasta del 14 de la Constitucion: que el Tribunal Superior reformado del Estado de Hidalgo ha sido nombrado para conocer de todos los asuntos del orden comun, lo que le quita el carácter de Tribunal especial: que el decreto reclamado núm. 141, que reformó ese Tribunal, no importa variacion alguna en las leyes penales del Estado, sobre responsabilidad de sus funcionarios ó empleados, ni ha venido tampoco á crear un Tribunal nuevo ó que antes no existiera, para hacer la aplicacion exacta de esas leyes; sino que simplemente ha hecho una reforma del Tribunal antiguo; reforma prevista é indicada en el art. 85 de la Constitucion particular, y que por lo mismo no puede decirse que ataca derecho alguno adquirido, puesto que todos los adquiridos lo han sido bajo esa condicion. Considerando: en cuanto á las garantías que cree violadas en su persona el ex Magistrado Osorio, cuya plaza quedó suprimida en el Tribunal reformado: que una vez aceptada la Constitucion del Estado, que por su art. 85 hizo precaria la condicion de los Magistrados del Tribunal, segun la reforma que la Legislatura hiciera, cuando lo tuviera por conveniente, nada puede alegarse contra la reforma hecha fundado en el art. 14 de la Constitucion Federal: que el decreto reclamado deja en absoluta libertad al

Lic. Osorio, para abrazar la profesion, industria, ó trabajo que le acomode y aun para volver á ser Magistrado cuando resulte electo, por lo que no puede considerarse violada la garantía del art. 4º constitucional: que la autoridad que ha expedido el decreto reclamado ha sido competente para hacerlo así, como reforma del Tribunal, y por otra parte la plaza suprimida, que desempeñaba el Sr. Osorio, no puede decirse su propiedad ó posesion en los términos del art. 16 de la Constitucion: que la supresion de una plaza ó empleo público, no es una destitucion del funcionario ó empleado, y no habiendo tal destitucion no puede decirse que se haya aplicado al Lic. Osorio una pena propiamente tal ó correccional y por lo mismo no puede considerarse violada la garantía del art. 21: por las razones y fundamentos expuestos, se decreta:

Primero; que se revoca la sentencia pronunciada en estos juicios el 21 de Octubre último por el juez de Distrito del Estado de Hidalgo en la parte que dice. "La Justicia de la Union ampara y protege á los CC. José M. Carbajal y Francisco de A. Osorio, contra el decreto núm. 141 de la Legislatura de este Estado, que reformó el Tribunal Superior y eliminó de sus cargos á algunos Magistrados porque tal disposicion viola en las personas de los quejosos la garantía consignada en el art. 14 de la Constitucion general."

Segundo: que se confirma en la parte que dice: "No se ampara ni protege al C. Carbajal contra el expresado decreto por violacion de la garantía del art. 13 del propio código."

Tercero: que se revoca en la parte que dice: "La Justicia Federal ampara y protege al expresado C. Osorio contra la referida disposicion, porque al destituirlo de su empleo, antes de expirar el período constitucional de su nombramiento,

to, viola en su persona la primera parte del mencionado art. 14."

Cuarto: que se aprueba en la parte que dice: "No se ampara ni protege al C. Osorio contra el propio decreto, por violacion de las garantías reconocidas por los artículos 4º, 16 y 21 de la referida Constitucion."

Quinto: que en consecuencia se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los CC. Carbajal y Osorio, contra el decreto núm. 141 de la Legislatura del Estado de Hidalgo, por no violar este decreto ninguna de las garantías individuales que los quejosos creen viola en su persona.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de esta Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—J. Simeon Arteaga.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—Simon Guzman.—Luis Velazquez.—José García Ramirez.—Ignacio Altamirano.*

Son copias que certifico. México, Noviembre 28 de 1872.—*Lic. Agustin Peralta*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes por María Bernardina Gonzalez, á favor de su marido Paulino López, contra el C. Gefe político del partido de esta capital por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El que suscribe, en ejercicio de la